

Instituto Federal de Defensoría Pública
Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Dirección de Vinculación y Derechos Humanos

Amparo indirecto: 1757/2019- IV-A

Asunto: *Se presenta Amicus Curiae*

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2023

Mtro. Rogelio Eduardo Leal Mota
Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán
PRESENTE

Jaqueline Saenz Andujo, Titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (en adelante, Instituto o IFDP), con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹ (en adelante, CPEUM o Constitución Federal); 23, numeral 1, inciso a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos² (en adelante, CADH); 1, 2 y 3 de la Ley Federal de Defensoría Pública³; 79, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles⁴; 3, fracción II, inciso a), 7 y 8 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública⁵; respetuosamente, comparezco para hacer llegar el presente escrito en calidad de ***Amicus Curiae*** para que sea analizado y en su oportunidad valorado en el juicio de amparo indirecto al rubro citado.

Interés del IFDP en el asunto

1. Este documento se presenta en calidad de *amicus curiae* o “amigo de la Corte” y como parte ajena al litigio, con la finalidad de brindar una opinión jurídica sobre algunas de las consideraciones que serán analizadas y resueltas en el amparo indirecto 1757/2019-IV-A del índice de ese Juzgado Segundo de Distrito.
2. Los temas de fondo que se resolverán en este juicio de amparo resultan relevantes para el Instituto Federal de Defensoría Pública en atención a que, derivado del mandato constitucional establecido en los artículos 17, párrafo octavo y 100, párrafo octavo de la Constitución Federal⁶ emanan diversas obligaciones relacionadas con el otorgamiento de un servicio de defensa pública y representación de calidad, principalmente, para aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

1 Artículo 1o. [...] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. -- **Artículo 8o.** Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

² **Artículo 23. Derechos Políticos.** 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; [...].

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u otras materias que determine el Consejo de la Judicatura Federal, y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establezca. --- **Artículo 2.** El servicio de defensoría pública será gratuito. Se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria, en los términos de esta Ley. --- **Artículo 3.** Para la prestación de los servicios de defensoría pública, se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación. En el desempeño de sus funciones gozará de independencia técnica y operativa.

⁴ **Artículo 79.-** Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

Artículo 3. Estructura del Instituto. El Instituto estará estructurado de la siguiente manera: [...] **II. Dirección General:** **a) Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos;** [...]. - - - **Artículo 7. Objetivos de la Unidad.** La Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos tiene como objetivo detectar los casos paradigmáticos o de notorio impacto legal que sean representativos de problemáticas legales relevantes o que cuestionen la convencionalidad o constitucionalidad de actos cometidos en perjuicio de los derechos de las personas solicitantes del servicio de defensoría pública. Casos que deberán ameritar su atracción en razón de dicho interés y transcendencia, y que podrán ser acompañados colaborativamente o ser directamente representados por esta Unidad, por designación de la Dirección General, por remisión de otras áreas del Instituto o a petición de la parte interesada. La participación de la Unidad buscará que, a través de litigios tales como la denuncia de contradicciones de tesis y amparos directos en revisión, se obtenga un criterio relevante o un pronunciamiento sobre constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - - - **Artículo 8. Atribuciones de la Unidad.** [...] **El acompañamiento colaborativo que realice la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos podrá consistir, entre otras acciones, en la presentación de escritos en auxilio (amicus curiae) ante juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se estime necesario allegar a esos actores de una opinión técnica jurídica especializada en razón de las complejidades o relevancia de cualquier asunto que tenga relación con el mandato constitucional u objeto del Instituto.**

⁶ **Artículo 17.** [...] La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. - - - **Artículo 100.** [...] El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición.

JAQUELINE SAENZ ANDUJO
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d7.de
26/05/24 17:00:00

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001)¹³. La segunda es la **“Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes”**¹⁴, la cual tiene una superficie de 219,207.83 hectáreas. La importancia de esta reserva es que suministra el 42% del volumen de agua en el Estado y el 19% del volumen del total en la Península de Yucatán. El agua albergada es utilizada por 1'350,67 habitantes, lo que representa el 69% de la población del Estado de Yucatán¹⁵. Asimismo, constituye un área de recarga, transición y descarga¹⁶.

10. Otro aspecto para destacar es que el anillo de cenotes es un ecosistema único en el mundo, ya que alberga el acuífero kárstico más importante que existe; además, es uno de los mayores ecosistemas subterráneos de agua dulce en el mundo y es la única fuente de agua dulce de la zona¹⁷. El agua de los cenotes y pozos son la principal fuente para beber de alrededor del 30% de la población rural de la península de Yucatán¹⁸.
11. Por la riqueza de sus ecosistemas, estado de conservación e importancia ecológica el 2 de febrero de 2007 y 2 de febrero de 2009, el Parque Estatal Lagunas de Yalahau y la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, respectivamente, fueron declaradas Humedales de Importancia Internacional de conformidad con el Convenio RAMSAR¹⁹.
12. En las dos importantes Áreas Naturales Protegidas, ubicadas en el municipio de Homún, los 3 ámbitos de gobierno (Federal²⁰, Estatal²¹ y Municipal²²) a través de diversas dependencias a su cargo, emitieron algunos permisos, autorizaciones, concesiones y licencias a la **Persona Moral denominada “Producción Alimentaria Porcícola” Sociedad De Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable** (en adelante, Granja Porcícola PAPO) a fin de que pudiera comenzar con la operación, ejecución e inicio de actividades del proyecto denominado **“Granja Porcícola Homún”**, en el municipio de Homún, el cual tendría una capacidad productiva de 49,000 cerdos según se desprende de la Manifestación de Impacto Ambiental (en adelante, MIA). El proyecto de la granja inicio operaciones el 19 de septiembre de 2018.
13. Inconformes con el inicio de operaciones de la granja porcícola, el 21 de septiembre de 2018, diversos pobladores y pobladoras de Homún se manifestaron y clausuraron de manera simbólica la Granja Porcícola PAPO²³. Luego de haber realizado la manifestación y clausura simbólica de la Granja Porcícola PAPO, el 28 de septiembre de 2018, niñas y niños de Homún —representados por sus madres— promovieron un juicio de amparo indirecto en contra del Titular del Poder Ejecutivo del Estado; del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) (hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable, SDS); y del Alcalde del municipio de Homún, todas autoridades del Estado de Yucatán, a quienes les reclamaron la ejecución, operación e inicio de actividades de la granja porcícola. Además, solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.
14. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, quien la admitió y radicó bajo el número de expediente 1128/2018-V. La Jueza

¹³ Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS). Información disponible en: <https://sds.yucatan.gob.mx/areas-naturales/yalahau.php>

¹⁴ El anillo de cenotes, se encuentra constituido por 53 municipios, los cuales se clasifican en cuatro subzonas en función del microrelieve que presentan y características propias como área de recarga, tránsito y descarga. Para más información véase el Decreto 117 emitido por el Poder Ejecutivo de Yucatán.

¹⁵ El Poder Ejecutivo de Yucatán la declaró como Área Natural Protegida mediante decreto número 117, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día 28 de octubre de 2013. Disponible en: <https://sds.yucatan.gob.mx/areas-naturales/documentos/decreto-reserva-estatal-geohidrologica-anillo-de-cenotes.pdf>

¹⁶ La zona de recarga, transición y descarga se refiere al curso que siguen las aguas pluviales en el suelo de la península de Yucatán, desde la filtración hasta la fase final del recorrido del flujo subterráneo al mar.

¹⁷ Durán Valsero, J.J. & Robledo Ardila, P.A. (2021), citado en Llanes Salazar, Rodrigo, et al. (2022). "Agua amenazada, informe sobre la grave contaminación del anillo de cenotes en la Península de Yucatán (México)". Pág. 9. Disponible en: https://www.dplf.org/sites/default/files/agua_amenazada_-_informe_contaminacion_anillo_de_cenotes_yucatan_mexico.pdf

¹⁸ Polanco-Rodríguez, A. & Araujo León, A. (2021), citado en Llanes Salazar, Rodrigo, et al, (2022). "Agua amenazada, informe sobre la grave contaminación del anillo de cenotes en la Península de Yucatán (México)". Pág. 12. Disponible en: https://www.dplf.org/sites/default/files/agua_amenazada_-_informe_contaminacion_anillo_de_cenotes_yucatan_mexico.pdf

¹⁹ El Convenio RAMSAR es un tratado intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos; entró en vigor en México el 4 de noviembre de 1986. Información disponible en: <https://www.ramsar.org/es>

²⁰ En el ámbito Federal, el 21 de febrero de 2018, la **Dirección de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)**, autorizó permisos para: **a)** la construcción de obras para la extracción de aguas del subsuelo; **b)** la concesión de aguas del subsuelo; **c)** el otorgamiento del permiso de descarga de aguas residuales; **d)** el permiso para la construcción de 7 pozos; por su parte, el **Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)**, el 10 de abril de 2018, otorgó el Título de concesión, asignación y/o permiso número 12YUC159589/32IMDA18 para la extracción del agua en Homún.

²¹ En el ámbito Estatal, el 18 de agosto de 2017, la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán** (hoy denominada, Secretaría de Desarrollo Sustentable, SDS), emitió la resolución en la que otorgó la autorización en materia de impacto ambiental a la Granja PAPO; y el 10 de julio de 2018, **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán** otorgó una suspensión con efectos de licencia de funcionamiento al apoderado legal de la Granja PAPO.

²² En el ámbito Municipal, el Presidente de Homún, 13 de octubre de 2016 otorgó el permiso de uso de suelo y el de construcción de naves porcícolas y de unidades de tratamiento de aguas residuales.

²³ Información disponible en: <https://progreso.com/noticias/aqua-si-cerdos-no-piden-el-cierre-de-la-granja-porcicola-de-homun-10106340/>.

otorgó la suspensión provisional para el efecto de que todas las autoridades responsables ordenaran la paralización de operaciones de la granja porcícola. Posteriormente otorgó la suspensión definitiva para los mismos efectos²⁴.

15. El 30 de octubre de 2018, las niñas y niños quejosos ampliaron su demanda de amparo, en la que señalaron a nuevas autoridades responsables²⁵ y nuevos actos reclamados²⁶, también solicitaron la suspensión provisional y definitiva sobre los nuevos actos, la cual les fue otorgada nuevamente.
16. Inconformes con la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, el apoderado legal de la Granja Porcícola PAPO y el Presidente Municipal de Homún, impugnaron mediante recurso de revisión²⁷ dichas determinaciones. Posteriormente, las y los niños quejosos, a través de sus representantes legales, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, SCJN) ejercer su Facultad de Atracción sobre los citados recursos de revisión.
17. La Primera Sala de la SCJN atrajo los recursos de revisión en incidente de suspensión interpuestos por la Granja Porcícola PAPO y el Presidente Municipal de Homún, reconociendo que el caso entrañaba una problemática excepcional que podía fijar criterios novedosos y de trascendencia para el orden jurídico mexicano²⁸. Antes de que la Primera Sala de SCJN resolviera en definitiva los recursos de revisión en incidente de suspensión²⁹ el representante de la Granja Porcícola PAPO se desistió de los mismos, subsistiendo únicamente el recurso de revisión en incidente de suspensión³⁰ interpuesto por el Presidente Municipal de Homún.
18. Posteriormente, la Primera Sala de la SCJN resolvió el recurso de revisión en incidente de suspensión interpuesto por el Presidente Municipal de Homún y concedió nuevamente la suspensión a las y los niños quejosos³¹.
19. El 31 de octubre de 2019, la Jueza Cuarta de Distrito se declaró impedida para seguir conociendo del asunto, por lo que fue turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, quien lo radicó bajo el número de expediente 1757/2019- IV-A y continuo con la secuela procedimental.
20. Es importante señalar que este Juzgado tiene la oportunidad de hacer efectivos y garantizar los derechos de la niñez de Homún, creando un precedente importante al analizar el derecho humano al agua que asiste a la parte quejosa, bajo la perspectiva de justicia hídrica (justicia del agua) y el derecho a la consulta como ejercicio de la autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos y comunidades indígenas, a la luz de un enfoque de infancia y adolescencia.

II) Materia de análisis en el juicio

21. Las niñas y niños quejosos plantearon en la demanda inicial de amparo y su ampliación conceptos de violación en los que alegan que los actos reclamados a las autoridades responsables violan sus derechos humanos al medio ambiente sano, al agua, a la autonomía, a la libre determinación, a la consulta, al desarrollo, a la salud, la inobservancia al principio precautorio y el impacto que la operación de la Granja Porcícola PAPO puede tener en la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán.

24

Disponible

en:

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=461/04610000236620790008006.pdf_1&sec=%C3%89dgar_Abimael_Cim%C3%A9_G%C3%B3mez&svp=1

²⁵ Señalaron como nuevas autoridades responsables a las siguientes: al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, al Presidente Municipal de Homún Yucatán; al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al Titular de la Dirección de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al Titular del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

²⁶ Se les reclamó la omisión de llevar a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones tendentes a preservar el equilibrio ecológico en el área natural protegida, denominada "Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán (a excepción del Titular del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien únicamente se le reclamó la inscripción de título de concesión de agua); así como diversos permisos, concesiones y licencias para que la granja PAPO pudiera iniciar operaciones.

²⁷ Recurso de revisión 197/2018, 90/2019, 199/2019 y 200/2019 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán.

²⁸ Véanse las sentencias emitidas en las Solicitudes de Ejercicio de Facultad de Atracción (SEFA) 116/2019 y 647/2019 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la Ponencia del Ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

²⁹ Los recursos de revisión en incidente de suspensión del índice de la Primera Sala desistió el representante de la Granja Porcícola PAPO, son: 1/2019, 4/2020 y 5/2020.

³⁰ Recurso de revisión en incidente de suspensión 6/2020.

³¹ Ibidem.

de garantizar el acceso oportuno, la calidad adecuada, la cantidad necesaria de agua para la población y la distribución equitativa del citado recurso hídrico³³. Debido a ello, en el presente apartado se abordará lo siguiente: **a)** fundamento jurídico del derecho humano al agua; **b)** los servicios ambientales del agua; **c)** el concepto de justicia ambiental; **d)** el concepto de justicia climática; **e)** el concepto de justicia hídrica o justicia del agua; y finalmente, **f)** Fallos con perspectiva de justicia hídrica o justicia del agua en Colombia.

a) Fundamento jurídico del derecho humano al agua

28. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Constituye un derecho indispensable para vivir dignamente, contribuye al desarrollo sostenible de la humanidad, es esencial para el progreso socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos³⁴.
29. Por su importancia para los sistemas ecológicos y para el ser humano es un “*derecho eje*” en la medida que articula otros derechos que dependen de este para su realización como la vida, el medio ambiente sano, la salud, la alimentación, el territorio, la cultura, la mejora continua del estándar de vida, entre otros³⁵. Dado la interdependencia de estos derechos se puede afirmar que, si se vulnera el derecho humano al agua, por consecuencia se estarían violando también estos derechos enunciados, incluso el derecho a un nivel de vida digna.
30. El agua ha sido reconocida como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos³⁶. En México, la Constitución federal prevé este derecho en el artículo 4º, párrafo sexto: “*Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.*”
31. Del precepto constitucional citado se advierte una tutela al derecho humano al agua y prevé que toda persona tiene derecho a su acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. De igual forma, establece que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios; así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
32. En ese sentido, se colige que el agua es un líquido vital necesario para las personas, su subsistencia y su pleno desarrollo. El Estado, a través de sus órganos de gobierno debe ejercer su custodia y protegerlo junto con sus funciones ecológicas asociadas, por ejemplo, los servicios ambientales —de los cuales se hablará más adelante— para el beneficio de la presente y futuras generaciones y la comunidad viviente en la Tierra.
33. En el ámbito internacional, se considera que el derecho humano al agua está contenido en los artículos 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos³⁷; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP)³⁸; así como los diversos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales³⁹, ambos pactos suscritos por México.

³³ Hurtado Rassi, Juliana. “Una aproximación al concepto de justicia hídrica en Colombia: algunas experiencias que buscan garantizar la protección y uso adecuado del agua”. Pág. 78. Disponible en: <https://digital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/144088cc-a3a8-42ae-8383-468ef93892ea/content>

³⁴ Organización de las Naciones Unidas (ONU). Disponible en: <https://www.un.org/es/global-issues/water>

³⁵ Urteaga Croveto, P., Segura Urrunaga, F. y Sánchez Hinojosa, M. (2019). "El derecho humano al agua, los pueblos indígenas y el petróleo". Perú: Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Pág. 21. Disponible en: <file:///D:/Usuarios/jmontiel/Downloads/Derecho%20humano%20al%20agua.pdf>

³⁶ Asamblea General de las Naciones Unidas. El derecho humano al agua y el saneamiento A/RES/64/292. Disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/38/PDF/N0947938.pdf?OpenElement>

³⁷ **Artículo 25.1.** Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios [...].

Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

³⁹ **Artículo 11. 1.** Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. **2.** Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre,

34. De los numerales citados, se desprende que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
35. El numeral 6.1 del PIDCP dispone que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y debe estar protegido por la ley, en tanto que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC) prevé que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, precisando que el Estado debe velar porque las personas tengan una alimentación, vestido y vivienda adecuados⁴⁰.
36. En ese sentido, el derecho humano al agua se encuentra estrechamente asociado con el derecho al más alto nivel posible de salud, contemplado en el numeral 12 del PIDESC⁴¹. Por lo que, la contaminación del vital líquido puede traer consigo severos daños irreversibles a la salud de las personas que disponen de éste.
37. Es importante destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 108ª sesión plenaria de 28 de julio 2010 emitió la resolución 64/292⁴², mediante la cual reconoció la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos. De ahí que como ya se dijo anteriormente, el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición para la realización de otros derechos humanos como el derecho humano a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentación y a la salud.
38. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General Número 15⁴³, se ha pronunciado en los mismos términos que la Asamblea General de las Naciones Unidas al señalar que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, por lo que ésta es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.
39. En dicha Observación también se destaca que el derecho al agua entrañaba tanto libertades como derechos en el entendido que las libertades implican el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos, mientras que los derechos comprenden, entre otros, un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
40. Asimismo, en la citada Observación General se establece que, el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico y, que el modo en que se ejerza el derecho al agua debe ser sostenible, es decir, de manera razonable, dado que se trata de un bien escaso que puede ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
41. De igual forma, en la Observación mencionada se destaca que para el adecuado ejercicio del derecho al agua se deben considerar los siguientes factores bajo cualquier circunstancia:

a) **La disponibilidad**, consistente en que el abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos:

adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para: **a)** Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; **b)** Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. **Artículo 12. 1.** Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. **2.** Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: **a)** La reducción de la morbilidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; **b)** El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; **c)** La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; **d)** La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

40 Observación general N° 12, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Párr. 6. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/derecho-a-una-alimentacion-adeuada.pdf>

⁴¹ ONU: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Observación general N° 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 11 agosto 2000, E/C.12/2000/4. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/docid/47ebcc492.html>

⁴² La mencionada resolución puede ser consultada en la siguiente página de internet: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/38/PDF/N0947938.pdf?OpenElement>

⁴³ Disponible en: https://aqua.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Observacion-15_derecho_al_agua.pdf

Bucareli 22 y 24, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México.

Tel. 51 30 01 00 Ext. 1146

44. En ese contexto, queda claro que corresponde a los Estados adoptar estrategias y programas amplios e integrados y velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan del agua de manera suficiente y salubre. Además, deben garantizar que los recursos hídricos naturales no se contaminen de sustancias nocivas y microbios patógenos que derivan en su mayoría de la industria porcícola.
45. En el caso que nos ocupa se encuentra debidamente documentado que la Península de Yucatán y su acuífero son altamente vulnerables a la contaminación de aguas subterráneas (pozos y cenotes), la cual es provocada primariamente por actividades económicas como son las granjas agrícolas y pecuarias que representan una de las principales fuentes de contaminación por nutrientes y organismos patógenos; así como por el uso de hormonas y antibióticos⁴⁴. Por tal razón, es imprescindible que se proteja el acuífero yucateco, al ser éste una de las principales fuentes de agua dulce que abastece a la sociedad yucateca y no solamente al Pueblo Indígena Maya de Homún.

b) Servicios ambientales del agua

46. Una vez expuesto el fundamento jurídico del derecho al agua, ahora toca referirnos a los *servicios ambientales* o también denominados *ecosistémicos* que ese vital líquido brinda, los cuales —a consideración de esta Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP— se han visto afectados por las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo, al haber emitido los diversos permisos, autorizaciones, concesiones y licencias a la Granja Porcícola PAPO, a fin que pudiera comenzar con la operación, ejecución e inicio de actividades de la granja en el Pueblo Indígena Maya de Homún, la cual tendría una capacidad productiva de 49,000 cerdos según se desprende de la Manifestación de Impacto Ambiental, afectando así las dos principales Área Naturales Protegidas ubicadas en el citado Pueblo Maya.
47. Los *servicios ambientales* son aquellos que prestan los ecosistemas, biodiversidad, recursos naturales y los componentes de la naturaleza, con o sin la intervención humana que tienen una funcionalidad positiva en el ambiente y permiten la vida sobre el planeta⁴⁵.
48. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los servicios ambientales son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta. Son el motor del medio ambiente debido a que son esenciales para la vida, por lo que la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos se deben utilizar de forma responsable para las presentes y futuras generaciones⁴⁶.
49. La Primera Sala de la SCJN ha destacado la importancia que tienen los servicios ambientales para las personas y sostiene que los mismos son aquellos con que el ser humano convive y forma parte de diversos ecosistemas, y a partir de ellos y de sus procesos biofísicos obtiene una serie de beneficios, sea porque les provee de bienes y condiciones necesarias para el desarrollo de su vida, o bien, porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad⁴⁷.
50. Los servicios ambientales son de cuatro tipos: de soporte, de regulación, de suministro y culturales. Entre los ***servicios ambientales de soporte*** podemos encontrar los relacionados con la formación del suelo, los del ciclo biogeoquímico⁴⁸, los del ciclo hidrológico, entre otros. En los ***servicios ambientales de regulación*** se encuentran los relacionados con el clima, el agua, la calidad del aire, la polinización, entre otros. En los ***servicios ambientales de suministro o provisión*** podemos identificar a los alimentos, combustibles, plantas, compuestos medicinales, la herbolaria y los materiales de construcción. Finalmente, en los ***servicios ambientales culturales***, están los relacionados con el valor cultural, lo espiritual, lo religioso, lo estético, lo educativo y lo recreativo⁴⁹.

⁴⁴ Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2023). “*Dictamen Diagnostico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán*”. Pág. 35. Disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat/documentos/dictamen-diagnostico-ambiental-de-la-actividad-porcicola-de-yucatan?idiom=es>

⁴⁵ Rojas Montes, V. (2013). Los servicios ambientales. *Revista De Derecho*, 12(23), 37-44. Recuperado a partir de <http://revista.uma.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/583>.

46 Concepto disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/servicios-ambientales-o-ecosistemas-esenciales-para-la-vida?idiom=es&~:text=Los%20servicios%20ecosist%C3%A9micos%20o%20ambientales,el%20motor%20del%20medio%20ambiente>

⁴⁷ Amparo en Revisión 307/2016. Párr. 127.

⁴⁸ Se refiere a los medios geológico, biológico y químico, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, etc.

⁴⁹ Challenger, Antony (2009). "Introducción a los servicios ambientales". Instituto Nacional de Ecología (INE) Y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Disponible en:

https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/semarnat.tabasco.gob.mx/files/dppcc_introduccion_servicios_ambientales.pdf
Bucareli 22 y 24. Col. Centro. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06040. Ciudad de México.

plantaciones de naranja, limón, papaya, aguacate, toronja, mandarina, sandía, frijol, entre otros⁵².

56. Los servicios ambientales culturales también constituyen una oferta importante del estado de Yucatán, destacando las bellezas naturales escénicas y culturales que brindan las grutas y cenotes como parte del acuífero. La visita a cenotes es uno de los principales atractivos turísticos en el interior de Yucatán. El 79% de empresas sociales de turismo alternativo lo incluyen en su oferta. En estas visitas se realizan actividades acuáticas como natación, snorkel, kayak, rappel y espeleobuceo. En torno a estos paradores turísticos también se realizan otras actividades como tours en trucks o bicicletas, camping, degustación de gastronomía típica, compra de artesanías y visitas a zonas arqueológicas, templos, vestigios, conventos y/o iglesias. Las visitas también incluyen atractivos culturales intangibles como ceremonias religiosas, festividades, saberes, usos y costumbres mayas⁵³.
57. Es importante destacar que los cenotes, grutas o cavernas en la Península de Yucatán han sido para las culturas prehispánicas y en la actualidad reconocidos como lugares ceremoniales de abastecimiento y en algunos casos de resguardo y han permitido a la cultura Maya su persistencia a través del tiempo⁵⁴.
58. En el Anillo de Cenotes se distribuyen más de 41 especies silvestres en peligro y más de 15 especies endémicas de la región, entre las que resaltan peces de agua dulce, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y murciélagos⁵⁵. En la fauna acuática se identifican invertebrados microscópicos como los rotíferos, los cladóceros y los copépodos. Como vertebrados, el pez ciego es una de las especies endémicas representativa de los cenotes que se encuentra en peligro de extinción⁵⁶.
59. Los servicios ecosistémicos que brinda la Reserva Hidrogeológica del Anillo de Cenotes son diversos y de gran importancia, por lo que, la extracción de grandes cantidades de agua para el suministro industrial y actividades agropecuarias como la que se pretende realizar con la Granja Porcicola PAPO afectaría de manera sustantiva el “**entorno adyacente**” de las y los niños quejosos y de la población en general que habita en el Pueblo Maya de Homún.
60. El **entorno adyacente** es un concepto que la Primera Sala de la SCJN desarrolló al resolver el amparo en revisión 307/2016⁵⁷ y más recientemente en el amparo en revisión 54/2021⁵⁸.
61. Al desarrollar dicho concepto la Primera Sala sostuvo que, el entorno adyacente es un espacio esencialmente geográfico que permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y que este espacio geográfico no está limitado a un criterio de vecindad inmediata. Es decir, que sólo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven “a un lado” del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios.
62. En ese sentido, el proyecto de la Granja Porcicola PAPO y los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias que le fueron otorgados por las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo causan diversos daños e impactos ambientales al entorno adyacente de las y los niños quejosos y ponen en peligro y detrimento los servicios ambientales que les ofrece el Área Natural Protegida denominada “*Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes*” extendida en lo que abarca el Pueblo Indígena Maya de Homún.

⁵² López Monsalvo, Myrna L. (2017). "Los servicios ecosistémicos como estrategia para la valoración del agua subterránea de la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes, Yucatán". Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C (CICY). Cancún, Quintana Roo. Pág. 54. Disponible en: [file:///D:/Usuarios/jmontiel/Downloads/PCA_M_Tesis_2017_L%C3%B3pez_Myrna%20\(13\).pdf](file:///D:/Usuarios/jmontiel/Downloads/PCA_M_Tesis_2017_L%C3%B3pez_Myrna%20(13).pdf)

⁵³ Ibidem. Pág. 44.

⁵⁴ Ibidem. Pág. 50.

⁵⁵ RAMSAR. (2010) Ficha informativa de los Humedales Ramsar-Anillo de Cenotes, 17 pp. Disponible en: <https://rsis.ramsar.org/RSapp/files/RSrep/MX2043RIS.pdf>

⁵⁶ López Monsalvo, Myrna Lili (2017). "Los servicios ecosistémicos como estrategia para la valoración del agua subterránea de la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes, Yucatán". Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Disponible en: [file:///D:/Usuarios/jmontiel/Downloads/PCA_M_Tesis_2017_L%C3%B3pez_Myrna%20\(5\).pdf](file:///D:/Usuarios/jmontiel/Downloads/PCA_M_Tesis_2017_L%C3%B3pez_Myrna%20(5).pdf)

⁵⁷ Resuelto por unanimidad de cinco votos en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de fecha 14 de noviembre de 2018.

58 Sentencia aprobada por unanimidad de cinco votos en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión pública del 9 de febrero de 2022.

JAQUELINE SAENZ ANDUJO
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d7.d
26/05/24 17:00:00

63. Como se anunció al principio de este documento, a esta Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP le interesa aportar elementos para que el derecho humano al agua sea analizado por ese Órgano Jurisdiccional con perspectiva de justicia hídrica. Para ello, resulta imprescindible hacer alusión a los conceptos de justicia ambiental y justicia climática, toda vez que, las problemáticas ambientales, entre ellas la climática afectan de forma desigual a la humanidad, principalmente a las comunidades y pueblos Indígenas que históricamente han tenido menor capacidad económica para su desarrollo, lo que ha ocasionado que sean ellos, los mayormente afectados por sus consecuencias.
64. Dicho lo anterior, es menester señalar que el concepto de justicia ambiental comenzó a aparecer a partir de la década de 1980 y puede ser entendido como el **tratamiento justo** y la **participación significativa** de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales⁵⁹.
65. Dentro de esa definición, el **tratamiento justo** supone que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal y local. Entretanto, la **participación significativa** resulta cuando: *i)* los residentes comunitarios potencialmente afectados tienen una oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su ambiente y/o salud; *ii)* la contribución del público y las preocupaciones de todos los participantes son efectivamente tenidas en cuenta y susceptibles de influir la toma de decisiones; *iii)* los responsables de decidir promueven y facilitan la participación de aquellas personas y/o grupos potencialmente afectados⁶⁰.
66. Así pues, se podría decir que la justicia ambiental es un marco analítico que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso a los servicios ambientales. Esta justicia —la ambiental— está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: *i)* la justicia distributiva; *ii)* la justicia participativa; *iii)* el principio de sostenibilidad y; *iv)* el principio de precaución⁶¹.
67. El elemento de **justicia distributiva**⁶² respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales para las y los habitantes de un Estado, sin que sea aceptable diferenciar algún sector de la población en razón de su origen étnico, de su género o de su condición socioeconómica⁶³.
68. Por su parte, el elemento de **justicia participativa**⁶⁴ se refiere a que en las decisiones ambientales se debe exigir la intervención activa y significativa de las personas que resultan afectadas por la ejecución de determinada actividad.
69. El **principio de sostenibilidad** proclama que los sistemas económicos y sociales deben ser reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se apoyan, esto es, la viabilidad ecológica. Conforme a este principio, las actividades humanas tienen la obligación de respetar los límites de absorción y de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las generaciones futuras y para otras especies vivas no humanas⁶⁵.

⁶⁰ *Ibidem.*

⁶² Esa característica se justifica en los siguientes mandatos: *i)* un principio de equidad ambiental prima facie, esto es, debe justificarse el reparto inequitativo de bienes y cargas ambientales en el diseño, implementación y aplicación de una política ambiental o en la realización de un programa, obra o actividad que entraña perjuicios ambientales; y *ii)* un principio de efectiva retribución o compensación, que implica que las personas que padecen cargas o pasivos ambientales producto de una obra o proyectos deben ser compensadas.

⁶⁴ Esto incluye la intervención de las comunidades étnicas diversas a través de la consulta previa. Tal elemento incluye la apertura de espacios para comunidad con el fin de que ésta intervenga en: *i)* las decisiones del proyecto; *ii)* la planeación; y *iii)* la evaluación de impactos, al igual que la forma de mitigarlos, compensarlos y prevenirlos. En este aspecto, la idea es que coexista el conocimiento técnico con el saber nativo sobre los asuntos locales.

⁶⁵ En la Sentencia T-411 de 1992, la Corte Constitucional Colombiana manifestó que la protección al medio ambiente está ligada al derecho a la vida de las generaciones actuales y de las ulteriores. Así consideró que: *"El patrimonio natural de un país pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes"*

JAQUELINE SAENZ ANDUJO
70.6a,66.20,63.6a,66.00,00.00,00.00,00.00,00.00,00.00,02.d7,d
26/05/24 17:00:00

JAQUELINE SAENZ ANDUJO
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d7.d
26/05/24 17:00:00

85. La justicia hídrica debe ser aplicada en circunstancias de injusticias relacionadas con el agua. La ***Declaración de Brasilia de las y los jueces sobre justicia hídrica***⁷⁷ es un instrumento de suma importancia, ya que en él se acordó que el actuar de las y los jueces debe ceñirse por 10 principios fundamentales a fin de promover la justicia hídrica mediante la aplicación de la legislación sobre el agua y el estado de derecho en materia ambiental.
86. Teniendo en cuenta su importancia, a continuación, se señalan los principios contenidos en la *Declaración de Brasilia de las y los jueces sobre justicia hídrica*, toda vez que en estos se integran los diferentes temas y necesidades que se presentan diariamente en los conflictos que surgen en relación con la calidad, cantidad y accesibilidad del agua.
87. En el principio 1 ***“El agua como un bien de interés público”*** de la citada Declaración, dispone que el Estado debe ejercer el manejo de todos los recursos hídricos y protegerlos en conjunto con sus funciones ecológicas asociadas, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, así como de la comunidad viviente de Tierra.
88. Del principio citado en el párrafo anterior, se desprende otro de suma importancia, el ***principio de equidad intergeneracional***, el cual establece que la generación presente deberá garantizar que la salud, la diversidad, las funciones ecológicas y la belleza estética del medio ambiente se mantenga o restaure para proporcionar un acceso equitativo de sus beneficios a cada generación sucesiva⁷⁸. Este principio se encuentra establecido en el artículo 3, inciso g), del *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe* (en adelante ***“Acuerdo de Escazú”***)⁷⁹; de acuerdo a la guía para su implementación principio de equidad intergeneracional es la base del desarrollo sostenible, ya que garantiza que no se ignoren los intereses de las generaciones futuras⁸⁰.
89. Por otro lado, es importante señalar que la ***Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras***⁸¹ señala que las generaciones actuales tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras⁸². Asimismo, marca que, las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano, y que cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas de los ecosistemas⁸³.
90. Sobre la protección del ambiente, la *Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras*, señala cuatro aspectos⁸⁴ de suma importancia, a saber:
- Para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la riqueza de los ecosistemas de la Tierra, las generaciones actuales deben luchar en pro del desarrollo sostenible y preservar las condiciones de la vida y, especialmente, la calidad e integridad del medio ambiente.
 - Las generaciones actuales deben cuidar de que las generaciones futuras no se expongan a una contaminación que pueda poner en peligro su salud o su propia existencia.

⁷⁷ Esta declaración fue presentada en la Conferencia de Jueces y Fiscales sobre Justicia del Agua en el 8° Foro Mundial del Agua que tuvo lugar en Brasilia (Brasil) desde el 18 al 23 de marzo de 2018. Esta declaración puede ser consultada en la siguiente página: <https://icelinternational.org/wp-content/uploads/2023/03/declaracin-de-brasil-de-jueces-sobre-justicia-hdrica-espaol.pdf>

⁷⁸ Principio 8 de la “Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental”. Disponible en: https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/sessions/uploads/spanish_declaracion_mundial_de_la_uicn_acerca_del_estado_de_derecho_en_materia_ambiental_final.pdf

⁷⁹ El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional, México lo firmó el 27 de septiembre de 2018 y el Senado de la República lo ratificó el 5 de noviembre de 2020, entró en vigor para todos los países miembros el 22 de abril de 2021. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/S2200798_es.pdf

⁸⁰ Guía de Implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pág. 85. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48494/S2300151_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y

⁸¹ Desarrollada en París Francia, el 12 de noviembre de 1997 en el marco de los instrumentos y programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, según sus siglas en inglés). Disponible en: <https://archivos.judicicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/24.pdf>

⁸² Artículo 1 de la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. Disponible en: <https://archivos.judicicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/24.pdf>

⁸³ *Ibidem*. Artículo 4.

⁸⁴ *Ibidem*. Artículo 5.

- iii. Las generaciones actuales han de preservar para las generaciones futuras los recursos naturales necesarios para el sustento y el desarrollo de la vida humana.
- iv. Antes de emprender grandes proyectos, las generaciones actuales deben tener en cuenta sus posibles consecuencias para las generaciones futuras.
91. Retomando los principios establecidos en la *Declaración de Brasilia de las y los jueces sobre justicia hídrica*, el principio 2 “**Justicia hídrica, uso de la tierra y función ecológica de la propiedad**” señala que toda persona titular de un interés o un derecho de uso sobre suelos o recursos hídricos tiene el deber de mantener las funciones ecológicas y la integridad de dichos recursos y los ecosistemas relacionados, lo anterior basado en los vínculos existentes entre el suelo, el agua y las funciones ecológicas de los recursos hídricos.
92. Por su parte, el principio 3 “**Justicia hídrica, pueblos indígenas, tribales y de las montañas, así como otros pueblos situados en las cuencas hidrológicas**” de la Declaración de Brasilia refiere el derecho de los pueblos indígenas y tribales al recurso hídrico bajo dos supuestos: el primero hace énfasis en el derecho de estos pueblos a los recursos hídricos y ecosistemas relacionados, señalando que las relaciones tradicionales y costumbres con dichos recursos y ecosistemas deben ser respetados y su consentimiento libre, previo e informado debe ser requerido respecto de cualquier actividad que pueda llegar a afectarlos. El segundo señala el desarrollo y la implementación de mecanismos adecuados para promover y facilitar la conservación de las partes altas de las cuencas y de las funciones hidrobiológicas y ecológicas que estos ecosistemas cumplen.
93. El principio 4 “**Justicia hídrica y prevención**” de la citada Declaración indica que para evitar la implementación *ex post* de costosas medidas para rehabilitar, tratar o desarrollar nuevas fuentes para el suministro de agua o los ecosistemas hídricos relacionados, debe ser prioritario prevenir los daños futuros sobre la remediación de daños ya causados, considerando las mejores tecnologías y prácticas ambientales disponibles.
94. El **principio de prevención** también se desprende de la *Declaración de Río*⁸⁵ y se refiere a la existencia de certeza de la realización de un daño ambiental futuro, es decir, un daño predecible y como consecuencia de ello se pueden adoptar las medidas necesarias a efecto de anticiparse a su producción, en todo caso, se disminuyan o neutralicen los daños al medio ambiente. Es decir, toma como base la certeza, por más mínima en su contenido para justificar medidas de protección al ambiente. En pocas palabras el **principio de prevención** responde a un riesgo confirmado.⁸⁶
95. El principio referido en el párrafo anterior, también se encuentra plasmado en el artículo 3, inciso e) del ya citado Acuerdo de Escazú; y de acuerdo con la *Guía para su implementación*, se basa en tres aspectos clave: **a)** la previsión, que crea la obligación de evitar o minimizar el riesgo de producir daños considerables antes de que ocurran; **b)** la diligencia debida, que exige una acción proactiva; y **c)** un ámbito espacial, que exige prevenir y cooperar sin importar cuál sea la ubicación del daño. En la práctica, el principio de prevención está relacionado con las obligaciones de diligencia debida, en particular con la obligación de hacer una evaluación del impacto ambiental antes de llevar a cabo actividades que supongan un posible riesgo de causar daño al medio ambiente. De ello se desprende que los Estados también deben tomar medidas para detectar dichos riesgos, obligación que tiene un carácter continuo, y llevar a cabo el análisis sobre la base de los conocimientos científicos disponibles⁸⁷.
96. Así, el criterio de *prevención* prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales. Se debe prevenir la consumación del daño y no actuar solamente sobre la reparación de los efectos perjudiciales, disponiendo incluso, la paralización de los efectos dañinos⁸⁸.
97. Por su parte, el principio 5 “**Justicia hídrica y precaución**” de la *Declaración de Brasilia de las y los jueces sobre justicia hídrica* establece que el **principio precautorio** debe

⁸⁵ Específicamente del **principio 17**, el cual dispone lo siguiente: "Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente."

⁸⁶ Medina Carrillo, Lourdes G. (2022). *“La aplicación del Principio Precautorio en México”*. Editorial Tirant Lo Blanch, Ciudad de México, 2022. Pág. 17.

87. Guía de Implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pág. 83. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48494/S2300151es.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

⁸⁸ Lorenzetti, Ricardo L y Lorenzetti, Pablo (2020). “*Derecho Ambiental*”. Pág.130. Editorial, Tirant lo Blanch.

ser aplicado en la resolución de conflictos con el agua. No obstante, la falta de certeza científica o complejidad respecto de la existencia o alcance de riesgos de daños serios o irreversibles al agua, a la salud humana o al ambiente, las y los jueces deben defender u ordenar las medidas de protección necesarias, teniendo en cuenta la mejor evidencia científica.

98. El **principio precautorio** igualmente se encuentra establecido en la *Declaración de Río*⁸⁹, la cual insta a los Estados a adoptar las medidas necesarias para compensar el deterioro del medio ambiente incluso en la ausencia de certeza científica acerca de los efectos nocivos causados por actividades previstas. Así, dicho principio se caracteriza por la anticipación y la expectativa, por lo tanto, está dirigido en parte para el futuro⁹⁰.
99. En otras palabras, el citado principio, establece que, con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, esto es, que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
100. El *Acuerdo de Escazú*, también contempla el *principio precautorio*, en su artículo 3, inciso f), y la Guía para su implementación, señala que el citado principio tiene por objeto facilitar una respuesta ambiental ante situaciones de incertidumbre, sobre todo de carácter científico. Asimismo, señala que cuando haya peligro de que ocurra un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como motivo para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos destinadas a evitar que el medio ambiente se degrade. Así, señala que este principio puede considerarse una ampliación del *principio preventivo*, ya que exige prevención incluso en caso de incertidumbre⁹¹.
101. Antes de pasar al principio 6 de la *Declaración de Brasilia de las y los jueces sobre justicia hídrica*, es importante destacar que, la diferencia sustancial entre los *principios de prevención y precaución* es la certeza que se tiene en relación con el riesgo, pues en el caso de la precaución se demanda una actuación estatal ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa, en cambio, conforme al principio de prevención, existe certeza respecto del riesgo causado⁹².
102. Dicho lo anterior, ahora toca referirnos al principio 6 “***In dubio pro aqua***”, —de la *Declaración de Brasilia de las y los jueces sobre justicia hídrica*— que en congruencia con el principio ***in dubio pro natura***, indica que, en caso de incertidumbre, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales y las leyes de aplicación deberán ser interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas relacionados. Es importante destacar que el principio ***In dubio pro aqua*** es aplicable únicamente a aquellos casos en los cuales se encuentre en juego una cuestión de naturaleza hídrica.
103. Sobre los principios señalados en el párrafo anterior es importante destacar que el principio ***in dubio pro natura*** establece que, en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos⁹³.
104. El principio en cita, parte de la existencia de una duda en torno a la cuestión fáctica o en torno a la interpretación de una norma, presupuesto a partir del cual las y los juzgadores deberán adoptar la alternativa que procure mayor protección al bien jurídico. Por otro

⁸⁹ Específicamente en el **principio 15**, al señalar lo siguiente: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Pág. 11. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/72022078.pdf>

91. *Guía de Implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.* Pág. 84. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48494/S2300151es.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

⁹² Véase Briñero Chaves, Andrés Mauricio, *El principio de precaución en una sociedad de riesgos ambientales*, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2017, pág. 50.

⁹³ Principio 5 de la “Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental”. Disponible en:

https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/sessions/uploads/spanish_declaracion_mundial_de_la_uicn_acerca_del_estado_de_derecho_en_materia_ambiental_final.pdf

110. En la citada Declaración las y los jueces reconocen que el daño al agua dulce y a los ecosistemas relacionados impactan desproporcionadamente a las personas y los grupos más vulnerables, incluyendo a las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas y pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y la necesidad de mitigar los impactos que en ella se ocasionan. Asimismo, destacan la importancia que tiene el ciclo hidrológico para el funcionamiento ecológico; la interconexión entre los sistemas de agua subterránea y superficial. También consideran que el agua dulce es un componente vital para todos los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como el hecho de que los ecosistemas proveen un rango de servicios esenciales para la vida. Subrayan que existe una necesidad urgente de alcanzar un alto nivel de protección ambiental de los recursos hídricos a la luz de la total dependencia biológica, ecológica, social, económica y cultural que tiene la humanidad respecto del agua para su supervivencia y reconocen que no debe permitirse realizar o llevar a cabo acciones cuando éstas impactan de manera potencial sobre los servicios o recursos hídricos y los ecosistemas relacionados.

111. La justicia hídrica —como se dijo al principio de este apartado— ha sido poco desarrollada a nivel internacional; es un concepto novedoso y ha sido aplicada en circunstancias de injusticias relacionadas con la cantidad, calidad, disponibilidad y acceso equitativo del agua.
112. Colombia, es uno de los pocos países que ha discutido desde diferentes perspectivas el tema de la justicia hídrica y ha plasmado éste concepto en decisiones que han visibilizado en algunas ocasiones la ineficiencia del Estado para la ejecución de sus funciones; a continuación se hace un breve análisis de 3 fallos que tienen como fin proteger, conservar y garantizar el acceso equitativo del agua y que ésta sea de buena calidad para las y los integrantes de las comunidades, así como recuperar los servicios ecosistémicos que brinda tan preciado líquido.

113. Esta sentencia fue emitida por el Consejo de Estado de Colombia, en ella se ordena el diseño e implementación de medidas para descontaminar el Río Bogotá, es reconocida por la importancia y el papel que las y los jueces han jugado en relación con la formulación de políticas públicas de carácter ambiental.
114. La decisión fue tomada por las y los jueces frente a la catástrofe ambiental, ecológica y económico-social de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, causada por el alto grado de contaminación debido a vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, malas prácticas agropecuarias e inadecuado manejo de basuras, por parte de los habitantes e industrias aledañas, así como la omisión de las autoridades frente a estas situaciones por más de treinta años⁹⁹.
115. En la sentencia se adoptó una serie de órdenes de carácter nacional, regional y local, que involucran diferentes autoridades. Algunas órdenes tienen carácter inmediato y otras se extienden por un plazo máximo de 3 años.
116. Por último, es preciso señalar que en la sentencia se protegen derechos colectivos; como, por ejemplo, derechos relacionados con el agua y el goce de un ambiente sano; conservación de las especies animales y vegetales; protección de áreas de especial importancia ecológica y de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas; el patrimonio público; el patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad públicas; entre otros¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Ibidem.

117. Esta sentencia es histórica ya que en ella se reconoce al *Río Atrato* como sujeto de derechos; con el fin de garantizar su protección y conservación, se nombra a un representante legal de los derechos del río; además, tiene un componente de participación que es de suma importancia, ya que ordena la construcción de diferentes planes de acción en conjunto con las comunidades para resolver la crisis humanitaria, social y ambiental que presenta el Río Atrato, sus afluentes y sus comunidades¹⁰².
118. La resolución es novedosa, ya que en ella prima una visión ecocentrista y de derechos bioculturales, cuyo eje central está profundamente relacionado con la unidad e interdependencia entre la naturaleza y la especie humana, esa visión es la base y el fundamento de las diferentes órdenes y decisiones que buscan, entre otras cosas, la recuperación de una fuente hídrica en la que actividades antropocéntricas como la minería ilegal año tras año han acabado con ese ecosistema de importancia estratégica para ese país¹⁰³.
119. Finalmente, es preciso señalar que el fallo ordena la consolidación de un panel de expertos convocado por la Procuraduría General de la Nación, el cual tiene como función asesorar el proceso de seguimiento y ejecución, y contribuir con el establecimiento de cronogramas, metas e indicadores de cumplimiento necesarios para la efectiva implementación de las órdenes proferidas en la sentencia¹⁰⁴.

120. En el asunto, un hombre presentó Acción de Tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, en contra del Presidente de la República, el Ministro de Salud y Protección Social, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras autoridades; en la acción reclama la vulneración a los derechos humanos del Pueblo Wayúu. Específicamente, resalta la situación especial a la que se enfrentaron los niños respecto a la provisión de alimentos, agua y servicios de salud y la falta de actuación de las autoridades, a pesar de que dictaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹⁰⁶.
121. En la sentencia, la Corte realiza una interpretación de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud de las niñas y los niños integrantes del pueblo indígena Wayúu. Para tal efecto, la Corte destacó las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de DESCA y la forma en que las decisiones estatales no obedecieron las normas nacionales e internacionales. Asimismo, analiza las problemáticas que aquejan al pueblo Wayúu¹⁰⁷.
122. En la resolución, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional por la gravedad de la afectación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del pueblo indígena. A su vez confirmó las decisiones judiciales para así tutelar los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu. Ordenó que se tomaran las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional, así como adoptar objetivos constitucionales mínimos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes Wayúu. También ordenó a la Defensoría del Pueblo que realizara un seguimiento de la implementación conjunta con la comunidad¹⁰⁸.
123. Una cuestión relevante de esta sentencia es que la Corte determinó que la ausencia de agua potable incidió en problemas de desnutrición de los niños y niñas de la comunidad Wayúu y que el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas no se limita a asegurarles la seguridad alimentaria, sino que debe tenerse en cuenta sus prácticas

20

tradicionales y los alimentos que acostumbran consumir, acordes con sus actividades propias de subsistencia¹⁰⁹.

124. Como se puede apreciar, en las sentencias analizadas, si bien no se hace un análisis de cada uno de los principios de la ***Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica de Brasilia***; sin embargo, a lo largo de las mismas, si se desprenden algunos de los principios de dicha declaración. Por ejemplo, en las sentencias de los Ríos Bogotá y Atrato se aplican por lo menos, los principios 3¹¹⁰, 6¹¹¹, 8¹¹² y 10¹¹³; en estas sentencias se destaca la importancia de la gobernanza ambiental que debe de ser implementada en diferentes ecosistemas del país, con miras a que las problemáticas ambientales no se incrementen hasta llegar al punto de no retorno. Por su parte, la sentencia de la Guajira, es un ejemplo en el que, sin duda, se aplica el principio 10, “*Justicia procesal del agua*” (sin excluir los demás) que busca, entre otras cosas, asegurar que las personas y grupos tengan acceso adecuado a los recursos hídricos y los servicios a cargo de las autoridades públicas entre los que se cuenta el acceso al agua potable.
125. A partir de todo lo expuesto en este apartado, este Juzgado de Distrito al momento de realizar el estudio sobre la alegada violación al derecho humano al agua que realizaron las y los niños quejosos en la demanda de amparo, debe aplicar las reglas y principios contenidos en el sistema normativo ambiental vigente, pero, además debe emplear cada uno de los principios establecidos en la Declaración de Brasilia de las y los jueces sobre justicia hídrica.
126. Ese juzgador al momento de resolver el asunto debe tener presente los principios ambientales citados, así como la vital función e importancia que el Área Natural Protegida, “Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes” tiene para las y los niños quejosos y para la sociedad yucateca peninsular en general. No se debe olvidar que la citada Área Natural Protegida proporciona una serie de servicios ambientales de suma importancia para la vida y supervivencia de las personas que ahí habitan.
127. Es importante señalar la necesidad de que se proteja la “Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes”, ya que se trata de una cuenca hídrica y humedal de importancia internacional, protegida por la Convención RAMSAR. Además, deben aplicarse los principios de justicia distributiva, participativa, sostenibilidad, prevención, precaución, de equidad intergeneracional, *in dubio pro aqua*, *in dubio pro natura*, el de “quien contamina, paga”, “quien usa, paga” y el de “obligaciones perdurables”. **Al aplicar debidamente todos estos principios se estará juzgando con perspectiva de justicia hídrica.**

IV. Derecho a la consulta como ejercicio de la autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos y comunidades indígenas. Su análisis bajo la perspectiva de infancia y adolescencia.

128. Resulta importante aportar elementos que permitan a este órgano jurisdiccional analizar el derecho a la consulta como ejercicio de la autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos y comunidades indígenas, bajo la perspectiva de infancia y adolescencia. Lo que implica que en cualquier decisión que se adopte en el ámbito jurisdiccional, que afecte de manera directa o indirecta los intereses de un niño, niña o adolescente debe tomarse con base en el reconocimiento de sus características propias¹¹⁴.
129. Es trascendental señalar que el derecho a la consulta como ejercicio de la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en México es fruto de la exigencia de diversos movimientos y organizaciones indígenas que impulsaron la emisión de los Acuerdos de San Andrés¹¹⁵, los cuales contienen varios compromisos¹¹⁶.

¹⁰⁹ Apartado 6.3.3 de la sentencia citada.

¹¹⁰ Denominado “Justicia hídrica, pueblos indígenas, tribales y de las montañas, así como otros pueblos situados en las cuencas hidrológicas”.

¹¹¹ Denominado “In dubio pro aqua”.

¹¹² Denominado “Justicia hídrica y buena gobernanza del agua”.

¹¹³ Denominado “Justicia procesal del agua”.

¹¹⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2014). “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes”. Pág. 48. Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciudad de México. Disponible en: https://www.tribunalbcs.gob.mx/admin/imgDep/Tribunal/Protocolos/protocolo_infancia_2da_version.pdf.

¹¹⁵ La firma de estos acuerdos aconteció en el mes de febrero de 1996 en el poblado de San Andrés Larráinzar, Chiapas, después de varios años de negociaciones a raíz del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994.

¹¹⁶ Algunos de estos compromisos son en materia de participación y representación política; remunicipalización; garantías de acceso a la justicia; situación, derechos y cultura de la mujer indígena; acceso y transferencia de medios de comunicación; educación pluricultural, y diseño de instituciones de fomento, desarrollo y difusión de las culturas indígenas. Véase a Zolla, Carlos y Zolla Márquez, Emiliano. *“Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas”*. México. UNAM, 2004. Disponible en: <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/ficha.html>

entre los cuales figuró el de reformar la Constitución federal, así como diversas leyes con el objetivo de establecer estos derechos a los pueblos indígenas de México¹¹⁷.

130. El derecho a la autonomía consiste en el ejercicio que los pueblos y las comunidades indígenas tienen para adoptar por sí mismos decisiones y prácticas propias relacionadas con su manera de ver e interpretar las cosas en relación con su territorio, recursos naturales, organización sociopolítica, económica, de administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura que no contravengan la unidad nacional¹¹⁸. Por su parte el derecho a la libre determinación se ha entendido como la base del diálogo para la construcción política de una nueva relación entre los pueblos indígenas y los Estados que puede dar lugar a arreglos específicos para que dichos pueblos determinen su desarrollo económico, social y cultural y otros aspectos de la libre determinación¹¹⁹.
131. En ese orden, la autonomía y la libre determinación fungen como vehículo para el ejercicio de otros derechos que permiten a los pueblos y comunidades indígenas construir su proyecto de vida y comunitario con base en sus usos, costumbres y tradiciones, sin coacción de ningún tipo o sin la intervención de entes del Estado.
132. Al respecto, según los criterios reiterados que ha emitido la SCJN los únicos límites que pudieran aceptarse frente al derecho a la libre determinación son el propio respeto a la unidad nacional y la compatibilidad con los artículos 40¹²⁰ y 41¹²¹ de nuestro texto constitucional, en el entendido de que este derecho no implica su independencia política ni su soberanía, sino la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que conduce al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional¹²².
133. Así, los derechos que les permiten a los pueblos y comunidades indígenas desarrollar su proyecto de vida y comunitario son: el relativo a la tierra, al territorio y a los recursos naturales; a elegir a sus representantes y autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos normativos; a implementar sus sistemas legales propios; a la participación política; a la integridad cultural; a la no discriminación y por supuesto, a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado¹²³.
134. En razón de lo anterior, y en atención a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de San Andrés, en 2001 se promulgó la reforma constitucional que reconoce por primera vez de manera expresa el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, a la libre determinación y a la consulta¹²⁴, los cuales son un pilar fundamental para su supervivencia, ya que estos son inherentes para el ejercicio de todos los demás derechos que tienen y que han sido reconocidos por diversos instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Americana sobre pueblos indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
135. Así, el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta como ejercicio de la autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos y comunidades indígenas se encuentra establecido en el artículo 2, párrafo quinto, apartado B, fracción IX de la Constitución Federal, el cual establece que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la

¹¹⁷ Ramírez Espinoza, Naayeli E.; Cerqueira, Daniel (2021). *“La libre determinación de los pueblos indígenas en México. Experiencia y regulación”*. Elaborado por Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA); Fundar: Centro de Análisis e Investigación; y Oxfam México. Pág. 16. Disponible en: https://www.dplf.org/sites/default/files/libro_libre_determinacion_marzo.pdf

164. Ciencia Jurídica. Departamento de Derecho. División de Derecho Política y Gobierno, Universidad de Guanajuato - Año 1, No. 2, 2012. Disponible en: <file:///D:/Usuarios/jmontiel/Downloads/Dialnet-EIDerechoALAAutonomiaDeLosPueblosIndigenasDeMexico-4216895.pdf>

¹¹⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2021). “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 413. 28 de diciembre 2021. Párr. 5. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf>

¹²⁰ **Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

¹²¹ **Artículo 41.** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. [...].

¹²² Véase, por ejemplo: Tesis: 1a. XVII/2010 “DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL”.

¹²³ Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA (2019). “*Derechos de los Pueblos Indígenas a la Autonomía y al Autogobierno como manifestación del Derecho a la Libre Determinación*”. Pág. 7. Disponible en: https://www.iwgia.org/images/documentos/Statements-support/Informe_autonoma_ESP.pdf | Ramírez Espinoza, Naayeli E.; Cerqueira, Daniel (2021). “*La libre determinación de los pueblos indígenas en México. Experiencia y regulación*”. Elaborado por Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA); Fundar: Centro de Análisis e Investigación; y Oxfam México. Pág. 16. Disponible en: https://www.dplf.org/sites/default/files/libro_libre_determinacion_marzo.pdf

¹²⁴ Véase el Artículo 2, párrafo quinto, así como el apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

JAQUELINE SAENZ ANDUJO
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d7.d
26/05/24 17:00:00

que tengan conocimiento de los posibles riesgos incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto, de forma voluntaria.

- **La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo.** Se debe garantizar, a través de procedimientos claros de consulta que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios.

143. Asimismo, el Tribunal Pleno de la SCJN, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018 consideró que los procesos de consulta de medidas legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas deben observar, como mínimo, las siguientes características y fases:

- a) **Fase preconsultiva** que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas.
- b) **Fase informativa** de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas.
- c) **Fase de deliberación interna.** En esta etapa —que resulta fundamental— los pueblos y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría directamente.
- d) **Fase de diálogo** entre los representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos.
- e) **Fase de decisión,** comunicación de resultados y entrega de dictamen.

144. Si bien es cierto que, lo resuelto por el Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018 se refiere a procesos de consulta sobre medidas legislativas; sin embargo, las fases establecidas en dicho proceso, también puede ser aplicadas a proyectos susceptibles de afectar de manera significativa a integrantes de Pueblos y Comunidades Indígenas, como lo es, el caso del amparo que esté juzgado resolverá, el cual fue promovido por niñas y niños del Pueblo Maya de Homún, quienes alegan la violación del derecho a la consulta.

145. Así pues, como se advierte, a pesar de que los derechos de autonomía, libre determinación y consulta se encuentran reconocidos a nivel nacional e internacional, los pueblos indígenas siguen enfrentando desafíos para poder ejercerlos en la práctica, esto debido a que el Estado se niega a renunciar al control territorial de zonas indígenas ricas en recursos naturales y biodiversidad, especialmente en un momento de desarrollo del capitalismo, donde la acumulación de capital se ve afectado por la insuficiencia de recursos energéticos y el capital financiero necesita nuevos espacios para la especulación de las patentes de conocimientos tradicionales¹³⁹.

146. Otro de los obstáculos que impiden el ejercicio del derecho a la autonomía, a la libre determinación y a la consulta de los pueblos indígenas es el cultural, el cual es de dos tipos:

- El primero se encuentra referido a la incapacidad de entender la libre determinación fuera de los esquemas conceptuales propios del Estado-Nación de la soberanía estatal, de la unidad de poder y de ordenamiento jurídico; es decir, la dificultad que el Estado tiene de negar la presencia de pueblos diversos.

¹³⁹ Aparicio Wilhelmi, Marco (2009). "La libre determinación y la autonomía de los Pueblos indígenas". Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLII, núm. 124, enero-abril de 2009. Pág. 20. Disponible: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42715756001>
Bucareli 22 y 24. Col. Centro. Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06040. Ciudad de México.

de distintas culturas en una misma realidad estatal, cuando es evidente que cada cultura tiene diferentes formas de coexistencia, pluralidad jurídica y de organización social¹⁴⁰.

- El segundo obstáculo es el etnocentrismo¹⁴¹, construido por el país al querer mantener a sus estados como monoculturales, monocivilizatorios y excluyentes al no reconocer la coexistencia de varios sujetos y sistemas jurídicos (pluralismo jurídico), con distintas implicaciones.

147. En consonancia con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) señala con preocupación que en varios países *“los pueblos indígenas y tribales enfrentan obstáculos para el ejercicio de su [autonomía y] libre determinación debido a limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales con respecto a su identificación y reconocimiento como pueblos diferenciados, y/o los aspectos colectivos de sus derechos”*¹⁴². Asimismo, señala que otro obstáculo al que se enfrentan es *“la falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas [...] y sus procesos de toma de decisiones, particularmente cuando existen intereses, económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios de estos pueblos”*¹⁴³.
148. Debido a esos obstáculos, varios pueblos y comunidades indígenas de México han acudido al Sistema Interamericano de protección a derechos humanos a denunciar algunas problemáticas a las que se han enfrentado para hacer efectivos sus derechos a la autonomía, libre determinación y su derecho a la consulta.
149. En octubre de 2014, durante el 153 Período de Sesiones de la CIDH se llevó a cabo la audiencia temática titulada *“Destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de megaproyectos de desarrollo”*. En esa oportunidad, los pueblos denunciaron -entre otras cosas- que, en la implementación de proyectos, el Estado mexicano ha sido omiso en la realización de la consulta y que cuando esta se lleva a cabo resulta inútil, ya que es una simulación para legitimar de manera sucesiva la obra. Asimismo, señalaron que toda la legislación en materia indígena se ha construido sin ser consultada, pues en los procesos legislativos no hay una sola palabra de los pueblos y comunidades indígenas¹⁴⁴.
150. Posteriormente, en diciembre de 2016, durante el 159 Período de Sesiones de la CIDH se llevó a cabo la audiencia pública temática, titulada *“Derechos de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán, México”*. Durante esa audiencia, los pueblos señalaron que a pesar de que en México ha habido un avance en el reconocimiento del derecho a la consulta previa en mandatos judiciales y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los hechos, los procesos de consulta no han cumplido con los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues su derecho a la libre determinación ha sido vulnerado¹⁴⁵.
151. Finalmente, en noviembre de 2019 los pueblos indígenas de México acudieron una vez más al Sistema Interamericano, a través de la audiencia pública temática, titulada *“Derechos de los pueblos indígenas y régimen agrario”*. En esa audiencia, los pueblos fueron enfáticos en señalar que en el proceso de reforma constitucional y legal que lleva a cabo el gobierno de México respecto a diversos temas de derechos indígenas se realizan foros regionales que no cumplen con los estándares de consulta libre, previa e informada; y que la libre determinación no está bien especificada en dicho documento¹⁴⁶.

¹⁴⁰ Ídem. Pág. 21-22.

¹⁴¹ El **etnocentrismo** se basa en una doctrina ideológica o estilo del cual la persona observa al mundo de acuerdo con el contexto de su propia realidad; tiende a expresar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante, o que la mayoría de sus rasgos de la cultura propia sean predominantes o superiores a los de otros grupos étnicos. Dentro de esta doctrina, los seres juzgan a otros grupos sociales en correlación a su propia cultura o grupo propio, fundamentalmente en lo relacionado con la lengua, las tradiciones, la religión, las manifestaciones, sus creencias, etc. Cruz Pérez, M. A., Ortiz Erazo, M. D., Yantalema Morcho, F., Orozco Barreno, P. C. (2018). "Relativismo cultural, etnocentrismo e interculturalidad en la educación y la sociedad en general". *ACADEMO (Asunción)* 5(2):179-188. Disponible en: <http://scielo.ics.una.py/pdf/academo/v5n2/2414-8938-academo-5-02-179.pdf>

¹⁴² Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2021). "Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales". OEA/Ser.LV/II. Doc. 413. 28 de diciembre 2021. Párr. 310. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf>

¹⁴³ Ídem. Párr. 17

¹⁴⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Audiencia temática "Destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de megaproyectos de desarrollo". Audiencia Pública del 153 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 30 de octubre de 2014. Min. 3:20 – 6:15; 18:22; 41-1:04:16. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rSyQwi8RnmA>

145 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Audiencia temática "Derechos de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán, México". Audiencia Pública del 159 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 05 de diciembre de 2016. Min. 11:43-16. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=idWJn3Hc1Os>

146 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Audiencia temática "Derechos de los Pueblos Indígenas y régimen agrario". Audiencia Pública del 174 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 12 de noviembre de 2019. Min. 28-33:20; 59-1:01:10. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=nxNhlrXLWo0>

JAQUELINE SAENZ ANDUJO
70.6a,66.20,63.6a,66.00,00.00,00.00,00.00,00.00,00.00,02.d7,d
26/05/24 17:00:00

infancia y adolescencia, el cual es un mandato vinculante en el ámbito nacional¹⁵³ e internacional¹⁵⁴ que exige que el interés superior de la niñez sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como privado. De ahí que, el estudio que ese órgano jurisdiccional realice sobre el derecho a la consulta como ejercicio de la autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos y comunidades indígenas debe tener como eje rector la perspectiva de infancia y adolescencia.

158. Para adoptar una perspectiva de infancia y adolescencia, de acuerdo con la Corte IDH y el Comité de los Derechos del Niño, las personas juzgadoras, en todas las actuaciones que involucren directa o indirectamente los derechos de niñas, niños y adolescentes deben considerar los cinco principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño¹⁵⁵, a saber: **i)** el reconocimiento de la personalidad jurídica de las y los niños y su derecho a la identidad colectiva; **ii)** el interés superior de la niñez; **iii)** el derecho a la no discriminación; **iv)** el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo; y finalmente, **v)** derecho de la niñez a opinar, a ser escuchada y a que sus opiniones sean debidamente tomadas en cuenta en función de su edad y madurez¹⁵⁶. A continuación, se analizará cada uno de estos principios.

i. Reconocimiento de la personalidad jurídica de las y los niños y su derecho a la identidad colectiva

159. La personalidad jurídica se traduce en el derecho que tiene toda persona a que se reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales lo cual implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes¹⁵⁷.
160. Por su parte, la identidad colectiva supone el reconocimiento jurídico y social de un grupo de personas como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva¹⁵⁸. En otras palabras, es el sentimiento de pertenencia a una determinada colectividad. Surge a partir de los vínculos culturales y afectivos que se dan dentro de la comunidad, dado que son entornos humanos en los que se comparten y defienden una serie de visiones o ideales, los cuales impregnan la identidad individual de cada miembro del grupo. Así, al compartir todos, en mayor o menor medida, unos mismos rasgos y sentirse ligados a ellos tienen un sentimiento común de pertinencia¹⁵⁹.
161. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las y los niños y su derecho a la identidad colectiva en el marco jurídico mexicano se encuentra establecido en los artículos 2° y 4°, párrafo octavo de la CPEUM¹⁶⁰, así como en el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes¹⁶¹.
162. En el ámbito internacional, diversos instrumentos reconocen la personalidad jurídica de las y los niños y su derecho a la identidad colectiva, algunos de estos instrumentos son:

¹⁵³ En el ámbito nacional se desprende del artículo 4°, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 2° párrafos segundo y tercero, 6°, 18, 26, párrafo octavo, y 81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y finalmente, el artículo 222 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

¹⁵⁴ En el ámbito internacional se desprende del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

155 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2021). “Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia”. Pág. 39. Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-02/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20Infancia%20y%20Adolescencia.pdf>

¹⁵⁶ Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350. Página 43. Párrafo 155. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf // Valenzuela Reyes, Mylene (2016). "Niños y Niñas indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte Sección: Estudios Año 23 - N° 2. Pág. 220. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371049347007>

157 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay Serie C N° 214, párr. 248, pág. 64. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/serie_c_214_esp.pdf

¹⁵⁸ Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018). "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad". Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri-identidad-ninas-ninos.pdf

¹⁵⁹ Montagud Rubio, Nahum (2020). *“Identidad colectiva: características de este fenómeno social”*. Disponible en: <https://psicologiyamente.com/social/identidad-colectiva>

¹⁶⁰ **Artículo 2.** [...] La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. [...] **Artículo 4°.** [...]. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: **I.** Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables; **II.** Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; **III.** Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y **IV.** Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño[a]”.

169. Asimismo, dicho principio se encuentra incorporado en el párrafo noveno del artículo 4° de la CPEUM, el cual establece que, *“en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”*.
170. Por su parte, los artículos 2, párrafos segundo y tercero, 17 y 18 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes¹⁷⁰ también prevén que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial.
171. Es importante señalar que este principio ha sido desarrollado de manera extensa por parte del Comité de los Derechos del niño[a] en su Observación número 14, en dicho documento el Comité establece que el objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño¹⁷¹. Asimismo, el Comité señala que el principio del interés superior de la niñez es un concepto triple:
- **Un derecho sustantivo.** Al ser la consideración primordial, se deberá evaluar y tener en cuenta al valorar distintos intereses, para tomar una decisión sobre una cuestión debatida que afecte a una niña o niño, o a un grupo de ellas(os).
 - **Un principio jurídico interpretativo fundamental.** Cuando una disposición jurídica admita más de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga el interés superior de la niña, niño o adolescente.
 - **Una norma de procedimiento.** Cuando se deba tomar una decisión que afecte a una niña, niño, adolescente, o a un grupo de ellas(os), es necesario realizar una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) sobre su vida y explicar por qué se tomó esa decisión.
172. Respecto a lo anterior, la Corte IDH en diversos fallos referidos a la niñez indígena ha hecho suyas las interpretaciones el Comité de los Derechos del Niño[a]. Es así como en el **caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay** ha señalado que *“la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad”*¹⁷². En el **caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia**, ha reafirmado la especial gravedad que revisten los casos de violación de los derechos humanos que afectan a los niños[as], titulares de derechos especiales derivados de su condición y donde *“rige el principio del interés superior de los mismos, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”*¹⁷³.
173. La SCJN también ha emitido diversas jurisprudencias relativas al principio de interés superior de la niñez, entre las que destacan las registradas con el número 2006011¹⁷⁴ y la número 2008546¹⁷⁵. En general esos criterios enfatizan que los tribunales deberán atender al interés superior de la niñez y adolescencia, y que éste demanda un estricto

¹⁷⁰ **Artículo 2.** [...] El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. **Artículo 17.** Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: **I.** Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; **II.** Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y **III.** Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. **Artículo 18.** En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

¹⁷¹ El Comité espera que los Estados interpreten el término "desarrollo" como "concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño" (Observación general N° 5. párr. 12).

¹⁷² Corte IDH, *Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214. Párr. 257. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_ing.pdf

¹⁷³ Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148. Párr. 244. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/sentencia_148_esp.pdf

¹⁷⁴ La jurisprudencia tiene como rubro el siguiente: “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.”

¹⁷⁵ La tesis tiene como rubro el siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL."

escrutinio de las particularidades del caso. Asimismo, señalan que debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, y se acentúa la obligación la persona juzgadora de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la niña, niño o adolescente.

174. Ahora por lo que toca al interés superior de la niñez indígena, el Comité de los Derechos del Niño[a] en la Observación General número 11¹⁷⁶, establece que este requiere particular atención ya que se concibe como un derecho colectivo y como un derecho individual, y que la aplicación de éste exige que se examine la relación con los derechos culturales colectivos. Asimismo, señala que los niños[as] indígenas no siempre han recibido la atención especial que merecen, y que, en algunos casos, su particular situación ha quedado a la sombra de otros problemas de interés más general para los pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra y la representación política que, en razón de ello, el interés superior del niño[a] no puede desatenderse o vulnerarse en favor del interés superior del grupo.
175. En cuanto a la legislación, las políticas y los programas que afecten a los niños[as] indígenas en general, el Comité señala que se debería consultar a la comunidad indígena y dar la oportunidad de participar en la labor de determinar cuál es el interés superior de los niños indígenas en general de forma que se tenga en cuenta el contexto cultural. Tales consultas deberían, en la medida de lo posible, incluir una verdadera participación de los niños indígenas¹⁷⁷.
176. Por último, el Comité señala que el principio del interés superior de la niñez exige que los Estados adopten activamente, en sus sistemas legislativo, administrativo y judicial, medidas que apliquen sistemáticamente ese principio estudiando las consecuencias de sus decisiones y de su actuación sobre los derechos y los intereses del niño[a]. Para que los derechos de los niños[a] indígenas queden efectivamente garantizados, esas medidas incluirían la formación y la concienciación de las categorías profesionales pertinentes en lo que se refiere a la importancia de tomar en consideración los derechos culturales colectivos al tratar de determinar cuál es el interés superior del niño¹⁷⁸.

iii. Derecho a la no discriminación

177. La no discriminación es un derecho humano entendido de manera general como la obligación de no hacer distinción alguna en el ejercicio de los derechos.
178. De acuerdo con ello, todo niño, niña o adolescente es titular de los derechos humanos que le son reconocidos sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales¹⁷⁹.
179. De esta forma, estamos ante un principio que no permite, a partir de cualquier característica de la persona, negarle o limitarle ningún derecho. En otras palabras, se trata de un principio que tiene como fundamento la igualdad de los seres humanos y a partir de ella la universalidad de los derechos, es decir, son derechos que corresponden a todas las personas¹⁸⁰.
180. El derecho a la no discriminación se encuentra garantizado en los artículos 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño[a]¹⁸¹; 3 del Convenio 169 de la OIT¹⁸²; 2 de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas¹⁸³; 1º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos

¹⁷⁶ Comité de los Derechos del Niño en la Observación General número 11. Párr. 30. Disponible en: <https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2018/09/observacion-general-11-ninos-indigenas-sus-derechos-en-virtud-convencion-2009.pdf>

¹⁷⁷ Ibidem. Párr. 31.

¹⁷⁸ Ibidem. Párr. 33.

¹⁷⁹ Convención sobre los Derechos del Niño[a], artículo 2.

¹⁸⁰ Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes”. Pág. 42. Disponible en: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/29794.pdf>

181 **Artículo 2. 1.** Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. **2.** Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

¹⁸³ **Artículo 2.** Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

JAQUELINE SAENZ ANDUJO
70.6a,66.20,63.6a,66.00,00.00,00.00,00.00,00.00,00.00,02.d7,d
26/05/24 17:00:00

192. Es preciso señalar que, antes de que las y los niños emitan una opinión, deben ser informados oportunamente con relación a los asuntos en los cuales se le requiera, así como de las diferentes circunstancias, consecuencias y opciones, pues la idea es que emitan una opinión informada; es decir, bajo el asesoramiento pertinente y adecuado a su edad.
193. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ***Opinión Consultiva OC-23/17 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos***, sostuvo que la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Asimismo, señaló que la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable¹⁹⁷.
194. En ese contexto, el Tribunal Interamericano también señaló, que en caso de pueblos y comunidades indígenas el Estado debe garantizar los derechos de consulta y participación en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de conformidad con sus costumbres y tradiciones¹⁹⁸. El citado Tribunal fue enfático al señalar que, en asuntos ambientales, la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan al medio ambiente¹⁹⁹.

195. Este derecho comporta la obligación y deber que tiene el sujeto receptor de la opinión de escuchar aquello que el niño[a] tiene que decir y escuchar, significa que aquella persona, generalmente un adulto, debe prestar atención significativa a lo expresado. Así, mientras el sujeto activo del derecho a opinar es el propio niño[a], el sujeto sobre el cual recae la acción del derecho a ser escuchado es aquel individuo en cuyas manos está tomar una decisión que pueda afectarlo²⁰⁰.
196. El deber de todo adulto de escuchar surge en razón del derecho que tiene el niño[a] de opinar y por ende de participar en diferentes procesos, que varían según su edad y desarrollo, abarcando diversas posibilidades, tales como: formarse puntos de vistas, expresar ideas, ser informado y consultado, hacer propuestas, analizar situaciones, entre otras que implican finalmente la toma de decisiones que incidan sobre su vida en cualquiera de los campos hacia los cuales él desarrolla su personalidad como sujeto de derecho²⁰¹.
197. Así, el derecho a ser escuchada o escuchado debe dar origen al establecimiento de fórmulas y mecanismos que estimulen, permitan y fortalezcan la participación del niño[a] a todo nivel y en cualquier proceso susceptible de afectarles.
198. Sobre el derecho de la niñez a ser escuchada, el Comité de los Derechos del Niño[a] en la Observación General número 12, apuntó que todos los Estados partes deben incorporar a su legislación procedimientos administrativos que se ajusten a los requisitos del artículo 12 y garantizar el derecho del niño[a] a ser escuchado junto con otros derechos procesales, como el derecho a la divulgación de los expedientes pertinentes, la notificación de la vista y la representación por los progenitores u otras personas²⁰².
199. El Comité —en la Observación General en cita— asentó que es más probable que un niño[a] participe en un procedimiento administrativo que, en uno judicial, porque los procedimientos administrativos son menos formales, más flexibles y relativamente

Tel. 51 30 01 00 Ext. 1146

fáciles de establecer mediante las leyes y normas. El procedimiento tiene que estar adaptado a los niños y ser accesible²⁰³.

200. Por último, sobre el derecho a ser escuchada y escuchado, el Comité señaló que el artículo 12 se relaciona con el derecho a expresar opiniones concretamente acerca de asuntos que afectan al niño y su derecho a participar en las medidas y decisiones que afecten su vida. Asimismo, reiteró que el artículo 12 impone a los Estados Parte la obligación de introducir el marco jurídico y los mecanismos necesarios para facilitar la participación activa del niño[a] en todas las medidas que lo afecten y en la adopción de decisiones y de tener debidamente en cuenta esas opiniones una vez expresadas²⁰⁴.

c. Derecho a que las opiniones de las y los niños sean debidamente tomadas en cuenta en función de su edad y madurez

201. Este derecho constituye el último de los tres componentes de lo que se ha denominado la tridimensionalidad del derecho a opinar²⁰⁵ y constituye en sí el fin último, la meta a lograr, sin lo cual el derecho a opinar carecería de su contenido más elemental, pues cabe preguntarse de qué valdría reconocerle y permitirle a un niño[a] que opine, escucharlo, si su opinión no va a ser valorada al momento de tomar una determinación con relación a su vida²⁰⁶.
202. El deber correlativo que encierra este derecho recae precisamente sobre la persona que va a tomar una decisión, la cual comporta la elección de una entre varias alternativas, y en cuya valoración de los factores en juego, uno que deberá ser estimado sin excusas y seriamente será la opinión del niño[a], incluso dependiendo de las circunstancias podrá ser el más importante²⁰⁷.
203. Así, la opinión que emitan las y los niños al formarse un juicio propio sobre cualquier cuestión que afecte de manera significativa sus derechos, debe ser tomada en cuenta. Ello en virtud, de que el Estado, forzosamente tiene la obligación que le impone la Convención sobre los Derechos del Niño[a] a tomar en cuenta los principios rectores de dicho ordenamiento, esto es, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las y los niños y su derecho a la identidad colectiva; el interés superior de la niñez; el derecho a la no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo; y finalmente, derecho de la niñez a opinar, a ser escuchada y a que sus opiniones sean debidamente tomadas en cuenta en función de su edad y madurez.
204. Tratándose de niños y niñas indígenas, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño[a], deberán interpretarse de manera conjunta con los derechos de participación y consulta, consagrados en los artículos 6, del Convenio 169 de la OIT²⁰⁸ y 17, 19, 30 y 38 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas²⁰⁹.
205. En efecto, de los estándares establecidos en los instrumentos internacionales antes citados, claramente se desprende que los Estados deben garantizar a través de mecanismos adecuados y pertinentes la representación de los niños y niñas indígenas, es decir, las consultas deberán ser formales, llevarse a cabo de buena fe, a través de mecanismos apropiados, adaptados a las circunstancias culturales y de contexto de

²⁰³ *Ibidem.* Párr. 66.

²⁰⁴ Ibidem. Párr. 81

²⁰⁵ Cf. *Supra*, párrafo 166.

²⁰⁶ Cf. *Supra*, nota de pie de página 156.

207 *Ibidem.*

²⁰⁸ **Artículo 6.1.** Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: **a)** consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; **b)** establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; **c)** establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. **2.** Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

²⁰⁹ **Artículo 17. 1.** Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. **2.** Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos. **Artículo 19.** Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. **Artículo 30.1 [...]. 2.** Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. **Artículo 38.** Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

- a) El estudio del derecho humano al agua debe ser analizado bajo la perspectiva de justicia hídrica (justicia del agua).
- b) Por un lado, la justicia hídrica es interdisciplinaria ya que deriva de la justicia ambiental y climática, que su estudio requiere de conocimientos técnicos y científicos propios del derecho ambiental, y por el otro, que está vinculada a la labor que realizan las y los juzgadores para resolver problemas relacionados con la inequidad en el acceso al agua, la calidad y la cantidad que requiere la población, la creciente contaminación de las fuentes de agua, el incremento en la sobreexplotación del agua subterránea, la ausencia de políticas públicas que incidan de manera positiva en aminorar las brechas de desigualdad en la distribución del agua y en la utilización eficiente de las aguas residuales.
- c) La operación y ejecución de la Granja Porcícola PAPO en la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes puede traer consigo afectaciones al medio ambiente, a los servicios ambientales que brindan los cenotes y al entorno adyacente del Pueblo Maya de Homún, lugar donde habitan las y los niños quejosos.
- d) El análisis del derecho a la consulta como ejercicio de la autonomía y libre determinación que asiste a los pueblos y comunidades indígenas debe realizarse bajo la perspectiva de infancia y adolescencia. Esto es, respetando los principios rectores establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
- e) Las autoridades señaladas como responsables al emitir los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias a favor de la Granja Porcícola PAPO no consultaron a las y los niños quejosos, mucho menos a las y los demás integrantes del Pueblo Maya de Homún donde habita la parte quejosa.

VI. Peticiones

Por lo antes expuesto, a Usted H. Juez del Juzgado Segundo de Distrito del Decimocuarto Circuito, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, respetuosamente solicito:

Primero. Tener a la suscrita como Titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública por presentada con este escrito, en calidad de *amicus curiae*.

Segundo. De estimarlo conveniente, tomar en consideración los argumentos desarrollados en el presente documento al momento de resolver el Juicio de Amparo Indirecto 1757/2019-IV-A, promovido por niñas y niños del Pueblo Indígena Maya de Homún.

A T E N T A M E N T E

Mtra. Jaqueline Saenz Andujo

Titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos
del Instituto Federal de Defensoría Pública



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
042200200000000000023678015.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	JAQUELINE SAENZ ANDUJO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.d7.de	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	22/05/23 16:30:40 - 22/05/23 10:30:40	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	66 52 c5 01 bc c5 8a e5 06 0d e6 58 6f 00 96 b6 60 57 d5 ae de c7 36 58 98 66 52 32 bd 20 cf 25 5d 11 5f f6 1e 84 4f 41 9b fa c7 c9 c5 7d f9 bf 47 15 9f 79 78 f7 77 71 fe 85 b8 53 94 41 0a f0 6e 8a c9 95 6d bc 71 5e 32 1e 66 6f 73 14 5e 08 ef 50 46 92 27 dd fb 3d e0 9f 2c 56 a1 6b 74 e6 bc 1a 12 a1 12 6b a9 6d 00 1a 23 ac a5 10 e6 62 7c 4f ab de 2a cb ba b3 ae 35 18 53 bc f6 5f a1 03 92 cf 36 59 71 76 e5 58 8d 26 1c 6b 9e 98 c9 ac 89 68 33 e5 86 88 1e 50 5d da 9e 11 b0 cb 0a da c3 e9 5e 01 0e 90 63 68 bd 94 f9 11 e7 38 3c 52 cf 0b 90 bb 99 7b 73 4c 44 d1 58 45 41 fe 99 0f 2a 7d 32 4c 4e 11 0b e7 e6 a2 b4 73 99 da bf 57 55 64 a1 1f d3 91 8f ce 22 d1 75 9e b9 c3 6d 5b 22 00 0a 9d dc c1 0a a6 3a 52 ab af 11 d2 d8 5e b5 fe 80 8e a4 78 b3 12 af 1d 64 31 93 80 ed			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	22/05/23 16:30:40 - 22/05/23 10:30:40			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	22/05/23 16:30:41 - 22/05/23 10:30:41			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	125090			
Datos estampillados:	J5D7StqhRqU0CeUBliBWdToLk7k=			